HUELGAS EN ESTADOS UNIDOS

Desde hace más de dos meses fué declarada una huelga por los trabajadores de la importante fábrica de Milwaukee, Allis-Chalmers, que tiene celebrados diversos contratos con el gobierno para la fabricación de materiales de guerra por valor de 45.000,000 de dólares.

La compañía se ha negado categóricamente a aceptar las demandas de los obreros, pero el día 26 del mes pasado el presidente de la empresa, un día después de haber regresado de un viaje a Washington, donde discutió el asunto con funcionarios del gobierno, recibió el siguiente telegrama, firmado por el Secretario de la Marina de los Estados Unidos y por el director de la Oficina de Administración de la Producción: "No podemos esperar más al arreglo de la huelga por los medios ordinarios. Debemos pedir a usted que NOTIFIQUE A SUS EMPLEADOS QUE DEBEN PRESENTARSE A TRABAJAR Y COMENZAR SUS LABORES DESDE LUEGO".

A este ultimátum, dirigido en realidad, no al presidente de la empresa instándolo a acceder aunque fuera en parte a las demandas de los huelguistas, sino a los obreros, conminándolos por conducto del patrón a regresar inmediatamente a sus labores, sin tener en cuenta la satisfacción de las peticiones formuladas, el presidente del C.I.O., Philip Murray, ha contestado a los funcionarios de Washington en términos de protesta; en igual forma se ha expresado John L. Lewis, y el presidente de los United Automobile Workers ha declarado que la orden proveniente de Washington "hace caso omiso de la justicia que ampara a los huelguistas y no tiene ningún apoyo en las leyes existentes".

Coincidiendo con el úkase dictado en el caso de la Allis-Chalmers, el Secretario de la Marina manifestó que consideraba urgente que los diversos Estados aceleraran la formación de guardias nacionales, "que quedarían disponibles para el caso de que tuvieran lugar serios disturbios por cuestiones de trabajo".

Dos días antes de ocurridos los hechos anteriores, el cable informaba que en Pensilvania la policía había atacado con gases lacrimógenos a lós huelguistas de la fábrica Bethlehem Steel Company, que tiene contrato con el gobierno por más de 1,000.000,000 de dólares; ese mismo día, en Chicago, según información de la prensa, "los cuerpos de policía, blandiendo macanas", tuvieron un encuentro con los trabajadores de la fábrica McCormick de la International Harvester Company; en tres grandes astilleros de la Bethlehem Steel Company, instalados en Nueva York, cinco mil trabajadores están a punto de ir a la huelga, después de ocho semanas de pláticas infructuosas, en las que "la compañía se ha negado a hacer cambio alguno de salarios e insiste en que el sindicato abandone su derecho para hacerse de miembros"; y en estos momentos el medio millón de mineros que dirige John L. Lewis, sin haber recurrido aún a la huelga, están pugnando por lograr la estipulación de un aumento de salarios en el nuevo contrato colectivo que debería haberse firmado el primero de abril, sin que hasta ahora los propietarios de las empresas manifiesten ninguna intención de acceder.

Además de estos casos, en diversos lugares de los Estados Unidos, particularmente después de la huelga de la Vultee Aircraft que tuvo lugar durante el mes de noviembre, se han planteado numerosos conflictos obrero-patronales, que han dado lugar a una gigantesca ofensiva de la prensa capitalista norteamericana en contra de los trabajadores, a quienes se acusa de falta de cooperación en el programa de "defensa".

Ciertos sectores del Congreso han cooperado en esa ofensiva, y según la revista "Newsweek" de fecha 3 del mes pasado, se han presentado diversas iniciativas tendientes "a establecer la pena de muerte en casos de sabotaje; a prohibir que sea condición necesaria ingresar a un sindicato para obtener empleo en los trabajos de deféns a, y a declarar ilegal todo acto huelguístico". Ninguna de las medidas propuestas ha sido aprobada hasta ahora, pero su sola presentación ante el Congreso es sintomática de la situación que en los Estados Unidos prevalece.

Durante el auge producido por la fabricación de armamentos, los salarios de los trabajadores, tomados en conjunto, han permanecido estables, y su porcentaje, en relacion con la renta nacional, ha disminuído durante 1940, al mismo tiempo que el costo de la vida ha aumentado considerablemente. Ninguna huelga se ha llevado a cabo con el propósito de sabotear el programa de armamentos trazado por Washington. La causa determinante de los movimientos obreros ocurridos ha sido el deseo de los trabajadores de contrarrestar la elevación incesante de los precios por medio de un aumento correspondiente de salarios.

El presidente Roosevelt ha condenado violentamente toda actitud o acción que de alguna manera signifiquen un obstáculo para el cumplimiento del llamado programa de "defensa"; ha dicho que no se permitirá que el egoísmo de los empresarios ni las agitaciones obreras ocasionen trastornos en la producción de armamentos; ha exigido igualdad de sacrificios. Sin embargo, en la práctica, el deseo expresado por Roosevelt no se ha visto satisfecho en sus dos aspectos. No sólo no se ha puesto coto al egoísmo de los fabricantes, sino que el propio gobierno se ha encargado de fomentarlo, al mismo tiempo que ese gobierno ha adoptado un actitud francamente hostil a los trabajadores, condenando los intentos que éstos hacen para impedir mayores descensos en su nivel de vida.

Al establecerse en Washington la Oficina de Administración de la Producción y otros departamentos encargados de organizar y supervisar el programa de "defensa", numerosos puestos de primerísima importancia fueron conferidos a los representantes directos o indirectos de los más poderosos monopolios de los Estados Unidos. Cerca de 20,000.000,000 de dólares han sido destinados a la fabricación de armamentos y los nuevos órganos administrativos de Washington son los que tienen a su cargo el manejo de los fondos; son los que conciertan los contratos gubernamentales con las empresas privadas.

Preside la Oficina de Administración de la Producción nada menos que el gerente de la General Motors, William S. Knudsen, y en esa oficina figuran como funcionarios del gobierno diversos representantes de los intereses de Morgan, Du Pont, Rockefeller y Méllon.

Independientemente de otras consideraciones, no deja de llamar la atención que algunos de los grandes trusts, cuyos representantes desempeñan en la actualidad puestos administrativos de gran importancia en el gobierno de Washington, contribuyeron eficazmente al rearme de Hitler, tal como fué demostrado en las investigaciones conducidas hace algunos años por el Comité Nye del Senado de los Estados Unidos.

H. J. White, jefe de una de las grandes compañías de trust de la familia Du Pont, es en la actualidad miembro prominente de la oficina gubernamental de Textiles Sintéticos y Productos Misceláneos, y tres altos empleados de la compañía Pratt & Whitney: Wesley A. Kuhrt, George S. Mead y M. S. Burke, desempeñan cargos de importancia en las oficinas de "defensa" del gobierno.

Con respecto a ambas compañías, la Du Pont y la Pratt & Whitney, en el informe del Comité Nye se dice lo siguiente: "De acuerdo con el convenio de 1936, que Du Pont tiene con las dos grandes compañías alemanas de explosivos —D.A.G. y Koln-Rottweiler—, las compañías acordaron llevar a cabo un completo intercambio con respecto a las patentes e inventos secretos con respecto a explosivos comerciales... Los testigos de Du Pont reconocieron la existencia del intercambio de explosivos para fines comerciales y militares. A este respecto el Senador Clark señaló que en caso de que Alemania fuera a la guerra, podría hacer uso de esos procedimientos para la fabricación de explosivos de guerra... Pratt & Whitney enviaron a Alemania maquinaria de aviación en grandes cantidades. C. W. Deeds, empleado de la compañía Pratt & Whitney, reconoció que los 176 aparatos enviados a Alemania podrían ser utilizados para fines de armamentos" (*Nye Committee Reports*, t. 3, pág. 255).

Los representantes de estas dos compañías, al igual que los representantes de muchas otras, cuyas actividades comerciales contribuyeron a hacer posible la segunda guerra mundial, proporcionando armamentos a las potencias fascistas, son ahora los que se ostentan como "defensores de la democracia". Ahora esos representantes otorgan a sus propias compañías contratos por valor de centenares de millones de dólares, lo que explica las ganancias fabulosas que las grandes empresas están obteniendo. La siguiente lista, en la que aparecen las utilidades adquiridas por algunas empresas norteamericanas, publicada en el número de marzo de este año en la revista "Economic Notes" de la *Labor Research Association*, demuestra, mejor que nada, el grado en que el gobierno de Washington ha "frenado" el egoísmo de los grandes monopolios:

		1939	1940	Porcentaje de aumento:
General Steel Castings	Dls.	5 661	1 106 196	19,441
Bell Aircraft		9 203	284 745	2 994
Phillips Jones Corp.		35 556	326 523	818
Liberty Aircraft		37 541	247 440	559
Sharon Steel Corp.		255 497	1 336 822	423
Soundview Pulp Co.		493 399	1 942 164	294
Douglas Aircraft		2 884 197	10 831 971	275.5
United Aircraft		104 713	381 089	264
Baldwin Locomotives		542 026	1 944 072	259
Otis Steel		214 965	717 007	234
Jones Laughlin Steel		3 188 944	10 277 029	222
Bath Iron Works		660 703	2 052 179	211
Pittsburgh Steel		564 870	1 555 794	175
Saco Lowell Shops		535 673	883 897	163
U. S. Steel Corp.		41 226 039	102 181 321	148
Woodward Iron Corp.		631 177	1 425 214	125
Monarch Machine Tool		529 577	1 183 103	123
Gisholt Machine Co.		437 163	969 161	122
Crucible Steel Co.		2 803 569	6 230 180	122
Yougnstown Sheet & Tube		5 004 484	10 815 468	116
American Steel Foundries		1 368 514	2 943 534	115
General Railway Signal Co.		247 593	526 761	113
Bendix Aviation Corp.		4 485 972	9 310 074	108
Westinghouse Airbrake Co.		2 765 629	5 591 606	102

Los trabajadores saben que los contratos gubernamentales han permitido que los monopolios norteamericanos amasen ganancias astronómicas y saben que esas empresas han exigido toda clase de seguridades para no correr ningún riesgo. Durante largos años los obreros han luchado para que se reconozcan sus derechos sindicales, para que se acepte el principio de la contratación colectiva, y sus esfuerzos han tropezado siempre con la oposición de importantes compañías, como la de Ford y la de Bethlehem, que ilegalmente se han negado a reconocer sus derechos. Y ahora resulta que el gobierno favorece a esas empresas al mismo tiempo que condena todo intento de los trabajadores para evitar que empeoren sus condiciones de vida.

La actitud asumida por el C.I.O., refleja el sentimiento de la masa obrera. En la reunión del Comité Ejecutivo de esa organización, celebrada en febrero último, fué aprobada unánimemente una resolución para luchar por el mejoramiento de salarios y de las condiciones de trabajo. Pero dada la actitud del gobierno, es de temerse que en esa lucha, que ya se inicia, los trabajadores norteamericanos sentirán en su propia carne el peso de las macanas de la policía, al mismo tiempo que continuará la línea ascendente de las ganancias de las grandes empresas. Y nadie podrá negar a los trabajadores el derecho a preguntarse si real y efectivamente ésta es una guerra tendiente a crear un nuevo y más justo orden social.

INEXPLICABLE REBELDIA

Un grupo bastante numeroso de diputados presentó recientemente una moción para que el general de la Garza, Secretario de Comunicaciones, sea llamado a informar a la Cámara de Diputados acerca de las razones que el Ejecutivo ha tenido para no aplicar el artículo 152 de la Ley General de Vías de Comunicación que establece que en el Distrito Federal "se formarán tantas sociedades cooperativas de intervención oficial como rutas para pasajeros... requiera el interés público y (que) dichas sociedades se organizarán en una sola Federación".

A este respecto el "Excélsior" del día 24 informa que aunque la interpelación se hará en el "tono comedido y cortés que merece el Secretario... se le preguntará: ¿QUE FUERZAS PODEROSAS SE ESTAN MOVIENDO para impedir que la ley aprobada" por el Congreso se cumpla?

Como recordarán nuestros lectores fué COMBATE, naturalmente, el único periódico que oportunamente planteó el incumplimiento de la disposición mencionada. Con una prudencia que entonces calificamos de exagerada, la misma ley concedió en su artículo primero transitorio, un plazo de 360 días—que empezó a correr el 19 de febrero de 1940—para que los permisionarios y trabajadores de autotransportes se organizaran en cooperativas. En esta situación, agregábamos, "cuando el plazo concedido estaba corriendo y cuando era de suponerse, teóricamente por lo menos, que los interesados se apresuraban a organizarse en cooperativas para cumplir lo dispuesto por la nueva ley... el Presidente expidió—el 28 de enero del corriente año—un acuerdo REFRENDADO POR SU SECRETARIO DE COMUNICACIONES, en el que a pretexto de que no se han dictado las disposiciones reglamentarias concede un nuevo plazo de 365 días para que los antiguos permisionarios cumplan..."

Ahora, como entonces, no podemos concebir cómo un simple acuerdo presidencial puede suspender los efectos de una ley dictada regularmente por el Congreso y debidamente promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal.

Se comprende fácilmente, pues, lo justificada que resulta la curiosidad de los señores diputados. La Cámara de Diputados, aprobó una ley que ya debería estar en vigor pero que ahora resulta que por un acto del Ejecutivo no lo está. De ahí, pues, la necesidad de que el Secretario de Comunicaciones informe a la Cámara.

Pero para mayor sorpresa de nuestros lectores debemos informar que "Novedades" del día 25 del pasado marzo recogió "en fuentes autorizadas" de la Secretaría de Comunicaciones la opinión de "que no hay objeto de tal interpelación" ya que en todo caso los trámites para prorrogar el plazo se harán directamente entre las empresas y el Jefe del Ejecutivo QUIEN SERA el que diga la última palabra". Hasta el momento en que estas líneas entran en prensa la noticia anterior no ha sido rectificada.

No queremos ni podemos suponer que el Secretario de Comunicaciones desconozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No queremos suponerlo porque no deseamos ofenderlo y menos podemos imaginarlo porque si no la conociera no sería Secretario de Comunicaciones. Si no se trata, pues, de un desconocimiento de las disposiciones constitucionales, la conducta del Secretario de la Garza sólo debe explicarse por desdén, desprecio, hacia nuestra ley fundamental.

Hay, sin embargo, otra explicación. Ya COMBATE ha hecho referencia a ella en otra ocasión. Los funcionarios mexicanos tienen frecuentemente una idea patrimonial de su encargo. Suponen—y actúan como si—su puesto oficial les otorgara derechos de propiedad de todo aquello que se refiere a su encargo. Algo semejante debe acontecer al Secretario de Comunicaciones. ¿Por qué iba a tener obligación de dar cuenta de lo que hace—y deshace,—a unos extraños como son los señores diputados? ¿Cuándo se ha visto que el dueño de una casa tenga que pedirle permiso a su vecino para colocar aquí un mueble y más allá un cortinaje?

Juzguen nuestros lectores, por lo siguiente, si no resulta justificada esta interpretación de COMBATE.

En nuestro número anterior nos referimos a la noticia proporcionada por "El Universal" del 23 de marzo según la cual la Secretaría de Comunicaciones aportará un millón de pesos para construir un estadio en Mazatlán, de acuerdo con los informes que ese diario obtuvo en la citada dependencia oficial. Véase todo lo que esto implica.

De acuerdo con nuestras leyes, el Gobierno Federal no puede gastar un solo centavo que no esté PREVIAMENTE autorizado en el Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba la Cámara de Diputados. Podemos asegurar a nuestros lectores que en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones no figura el millón de pesos para el estadio

(Pasa a la pág. 8)